

La Región acoge ya a sesenta menores procedentes del reparto de Canarias y Ceuta

Son cerca de la mitad de los previstos, pero el nuevo cálculo del Ministerio podría elevar la cifra total a más de 150

RUBÉN GARCÍA BASTIDA
Murcia

El Gobierno central ha trasladado a la Región de Murcia a 60 menores extranjeros no acompañados desde el pasado mes de julio, dentro del reparto establecido por el Ministerio de Juventud e Infancia para aliviar la situación de colapso en Canarias, Ceuta y Melilla. En ese mes, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia amplió la capacidad ordinaria otorgada a la Comunidad hasta las 517 plazas, lo que supuso la asignación de 117 traslados de menores, según ha podido saber LA VERDAD de fuentes del Ejecutivo regional, de los que se habrían completado hasta ahora algo más de la mitad.

El Gobierno regional subraya, por otra parte, que casi uno de cada cuatro de estos niños y adolescentes reubicados hasta ahora en la Región de Murcia tiene arraigo familiar o personal en otras comunidades autónomas. En concreto, 14 de los 60.

Sobre esta circunstancia, el Ejecutivo ya se quejó el pasado mes de octubre, cuando se tramitaron los primeros 11 expedientes. Entonces, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad destacó que en la documentación remitida a la Comunidad había constatado que tres de ellos contaban con familiares en Canarias o Ceuta, un hecho que consideró la demostración de que no se



Una trabajadora de Cruz Roja acompaña a un menor rescatado frente a las costas de la isla del Hierro en una imagen de archivo. ANTONIO SEMPERE / EP

estaba primando «el interés superior del menor, ni su arraigo».

Las cifras del incremento

Los traslados continuarán en los próximos meses y, previsiblemente, la cifra que tendrá que gestionar la Comunidad se va a ver incrementada. El borrador de modificación del real decreto que el Ministerio pretendía plantear a las comunidades autónomas a principios del pasado mes de abril estableció un aumento de la capacidad ordinaria estimada para la Región de

Murcia de 36 plazas, hasta 553. Esto, teniendo en cuenta los 117 traslados establecidos inicialmente, que podría elevar el total asignado a 153.

La reunión finalmente no se celebró por el plantón coordinado de todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que obligaron con su ausencia a la suspensión, por segunda vez consecutiva, de la sesión, dentro de la guerra abierta por los ejecutivos del PP contra el Gobierno central en torno a los traslados.

Sin embargo, el bloqueo, según ha afirmado el Ministerio, no evitará que el incremento asignado siga adelante. La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que su departamento llevará un nuevo real decreto al Consejo de Ministros que recogerá la nueva capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las distintas comunidades y que elevará la cifra asignada a la Región de Murcia, mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Torres, aseguró que esa modificación hará efec-

tiva la prórroga del mecanismo por un año más, extendiendo los traslados hasta agosto de 2027.

El Gobierno regional mantiene su rechazo frontal al reparto, en un bloque con el resto de autonomías del PP que centra la argumentación de su rechazo en la invasión de competencias y la falta de recursos asociados suficientes, aunque su posición no ha ido tan lejos como otras comunidades como Madrid, que han asegurado que bloquearán los traslados por haber expirado los plazos previstos.

La 'vía extremeña' inquieta a las entidades sociales por la infancia

La Plataforma de Organizaciones por los derechos de los niños anticipa que la cesión de competencias sociales a Vox podría extenderse

R. G. B.
Murcia

Lo sucedido con el pacto de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura, que ha puesto en manos del partido de Abascal las competencias sobre los menores migrantes no acompañados, genera inquietud en la Plataforma de

Organizaciones de la Infancia de la Región de Murcia y otras entidades del Tercer Sector de la Región. El pasado jueves 29, el Diario Oficial de Extremadura detalló pormenorizadamente el reparto de competencias que regirá en el Ejecutivo autonómico que preside la popular María Guardiola; así, permitió saber que sería la vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que dirige Vox, la titular de las competencias en materia infancia, «incluidas las referidas a menores migrantes no acompañados».

El contenido de los pactos que Vox ha ido firmando en los últimos años en las distintas comunidades

autónomas, ya anticipa lo que puede esperarse al respecto. Desde el acuerdo que rubricó en la Región de Murcia con el PP para la aprobación de los Presupuestos de 2025, que obligó al cierre del centro de menores no acompañados de la pedanía murciana de Santa Cruz y su traslado al Albergue de El Valle, hasta el texto que posibilitó el Gobierno extremeño, que arranca su epígrafe sobre inmigración con un 'No más menores extranjeros no acompañados', la reestructuración del acogimiento ha sido protagonista.

«No nos extrañaría en absoluto que en la Región de Murcia también pudieran entrar estas competencias

en negociaciones futuras», concede la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la Región de Murcia, Juana Calero. «Aquí ya se ha cedido a muchos chantajes de Vox con los menores. No me sorprendería nada que se pudiera plantear dejar también los servicios y las políticas sociales en manos de Vox».

Para Calero, el rechazo del Ejecutivo a los traslados es una muestra más del influjo de los de Abascal en la actuación con la infancia migrante. «Es Vox quien está presionando para que el Gobierno regional ponga todas las dificultades posibles para que no mejore la situación de estos menores. En realidad, todo el proceso de desinstitucionalización de niños de 0 a 6 años no se está realizando. No están cumpliendo con la orden. Había un programa europeo que habían pedido dentro del FSE+ para buscar familias de acogida, y de momento no se está llevando a cabo», subraya. Calero con-

sidera, además, que «no se trata de un problema económico», como argumentan los gobiernos autónomos del PP, con la única salvedad del de Ceuta. «Esos niños vienen con financiación. Es que no quieren», afirma.

Comparten esa visión en Amnistía Internacional, que lamentan la «falta de acuerdo político» para garantizar el interés superior de la infancia, y subrayan que la acogida «es solo cuestión de voluntad política». Para la ONG es urgente que se lleven a cabo los traslados y la reubicación del reparto extraordinario. Por ello, recuerda que «todas las autoridades competentes e instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar los derechos de estos menores».

Otras entidades sociales consultadas reconocen que ha comenzado a extenderse cierto temor en la Región de que la senda iniciada en Extremadura pueda acabar teniendo réplica en la Región.